EL FINANCIERO

Contingencias ambientales develan la ineptitud gubernamental

2026-02-18 01:49:47 |

El cambio climático ya no es una hipótesis, es una factura diaria que pagan las economías emergentes, y México no es la excepción. El discurso oficial suele llenarse de compromisos internacionales, metas de descarbonización y llamados a la justicia climática; sin embargo, en la realidad cotidiana, los efectos del incremento de las temperaturas golpean con crudeza a la población y exhiben la fragilidad de las políticas públicas.

El aumento sostenido de las temperaturas está trastocando los ciclos agrícolas, reduciendo rendimientos y encareciendo alimentos básicos. En las zonas rurales, la sequía prolongada y la irregularidad de las lluvias afectan directamente a pequeños productores que carecen de seguros suficientes y de infraestructura hidráulica moderna. Cada grado adicional en el termómetro significa menos cosecha, menos empleo y mayor presión migratoria.

Pero el impacto no se limita al campo. Las grandes urbes también pagan un precio elevado. La Ciudad de México se ha convertido en un laboratorio de las contradicciones ambientales. Las contingencias son cada vez más frecuentes y prolongadas (cinco en los últimos días). La capital, asentada en una cuenca con limitada ventilación natural, enfrenta una combinación letal: altas temperaturas que favorecen la formación de ozono y una movilidad basada aún en combustibles fósiles.

El resultado es conocido: restricciones vehiculares que alcanzan incluso a propietarios de autos nuevos con holograma 0 y 00, quienes, pese a cumplir con la normatividad ambiental, se ven obligados a dejar el automóvil en casa.

La autoridad capitalina argumenta que se trata de medidas extraordinarias para proteger la salud pública. Sin embargo, la recurrencia de estas contingencias revela algo más profundo: la ausencia de soluciones estructurales.

La administración de Clara Brugada presume a la capital como una ciudad de libertades. No obstante, cuando se restringe el libre tránsito de ciudadanos que han cumplido con la ley y han invertido en vehículos menos contaminantes, el discurso se erosiona. La política pública no puede descansar en la esperanza de que soplen los vientos o llegue la lluvia para dispersar contaminantes. Esa no es estrategia ambiental; es resignación meteorológica.

Las economías emergentes enfrentan un dilema complejo: deben crecer para reducir pobreza, pero hacerlo sin repetir el modelo intensivo en carbono de los países desarrollados. Sin financiamiento climático suficiente y con limitaciones fiscales severas, el margen de maniobra es estrecho. No obstante, ello no justifica la improvisación. Invertir en transporte público eléctrico, fortalecer la infraestructura de energías limpias y modernizar redes eléctricas no es un lujo, es una necesidad económica.

Se deben cancelar las refinerías adyacentes a las zonas urbanas y establecer medidas de mayor control a la industria contaminante asentada en ellas.

En el caso mexicano, el costo de no actuar se refleja también en la salud pública. El aumento de temperaturas favorece la propagación de enfermedades y agrava padecimientos respiratorios. A cuatro meses de que el país sea anfitrión de partidos del Mundial de futbol de 2026, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, la imagen internacional importa.

Con un brote epidemiológico de sarampión en el país merced a la inaplicación de vacunas a

infantes en el sexenio de AMLO y episodios recurrentes de mala calidad del aire que colocan a la capital entre las ciudades más contaminadas del mundo, el escaparate global podría convertirse en vitrina incómoda.

Las contingencias ambientales no solo afectan a los automovilistas. Impactan la productividad, encarecen la logística y reducen competitividad. Empresas que dependen de movilidad eficiente enfrentan retrasos; trabajadores pierden horas laborales; el comercio sufre. El cambio climático, en este contexto, deja de ser una abstracción ambiental para convertirse en un factor macroeconómico.

Desde EL FINANCIERO hemos documentado cómo la transición energética avanza con lentitud. Mientras otras economías emergentes aceleran inversiones en energías renovables y movilidad eléctrica, México parece atrapado en debates ideológicos y decisiones centralizadas que privilegian esquemas tradicionales.

No se trata de minimizar la complejidad técnica de gestionar una megalópolis como la capital del país. Se trata de reconocer que la política ambiental requiere planeación de largo plazo, coordinación metropolitana real y decisiones basadas en evidencia científica. Las medidas reactivas, aunque necesarias en momentos críticos, no pueden convertirse en la regla permanente.

El cambio climático está redefiniendo la competitividad de las naciones. Aquellas que logren adaptarse con infraestructura resiliente, sistemas de salud robustos y políticas energéticas modernas atraerán inversión y talento. Las que permanezcan en la inercia enfrentarán mayores costos sociales y económicos.

En este contexto, la capital mexicana enfrenta una prueba de fuego. No basta con declarar compromisos ambientales; es indispensable traducirlos en resultados medibles. De lo contrario, la narrativa de ciudad progresista chocará con la experiencia diaria de ciudadanos que, aun cumpliendo la norma, son castigados por la incapacidad gubernamental de resolver un problema estructural.

La crisis climática no espera calendarios electorales ni eventos deportivos internacionales. Exige liderazgo, visión y ejecución. De no asumir con seriedad el desafío, México corre el riesgo de exhibir ante el mundo no solo cielos grises, sino políticas igualmente mediocres e insuficientes.